

La industria colombiana de los combustibles fósiles provoca la pérdida de biodiversidad y la injusticia medioambiental, pero las estructuras financieras y jurídicas internacionales dificultan una transición equitativa de la economía hacia una economía no extractiva.

Colombia es un país megadiverso, que alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta.⁸⁷ Es el primer país del mundo en diversidad de especies de aves y orquídeas, y el segundo en plantas, mariposas, peces de agua dulce y anfibios.⁸⁸ Colombia se ha comprometido internacionalmente a conservar la biodiversidad en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y su nuevo gobierno ha prometido alejar al país de su dependencia económica de las exportaciones de combustibles fósiles.⁸⁹

Sin embargo, la trayectoria económica de Colombia es insostenible desde el punto de vista ecológico, y el sector extractivo es uno de los principales causantes de la deforestación y el declive de la biodiversidad.⁹⁰ Este estudio de caso muestra cómo la autonomía de Colombia para frenar los impactos de la extracción se ve limitada por las presiones financieras internacionales y la ley de inversiones, que incentivan la producción para la exportación, en un contexto de fuga de capitales y devaluación de la moneda.

En la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina se libra una batalla entre las prioridades del gobierno y las obligaciones macroeconómicas. El Cerrejón es una mina de la empresa transnacional Glencore,⁹¹ situada en una región vulnerable de bosque tropical seco en el norte de Colombia, considerado el ecosistema tropical de tierras bajas más amenazado del mundo.⁹² Desde principios de la década de 1980, las comunidades cercanas han sufrido una serie de violaciones de los derechos humanos e impactos ambientales derivados de la mina, como el despojo violento y el desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales,⁹³ la deforestación,⁹⁴ y la contaminación del aire, el agua y el suelo.⁹⁵ La mina ha sido objeto de múltiples casos de derechos humanos ante el Tribunal Supremo, que ha declarado inconstitucionales los impactos de la mina sobre el medio ambiente y la salud.⁹⁶ En 2020, varios

⁸⁷CBD, "Colombia-Main Details", CBD, consultado el 7 de noviembre de 2023, www.cbd.int/countries/profile/?country=co.

⁸⁸CBD, "Colombia-Main Details".

⁸⁹María Paula Rubiano A., "How Colombia Plans to Keep its Oil and Coal in the Ground", BBC, 16 de noviembre de 2022, www.bbc.com/future/article/20221116-how-colombia-plans-to-keep-its-oil-and-gas-in-the-ground.

⁹⁰La ENBPA de Colombia reconoce las tensiones existentes entre "conciliar la conservación con las perspectivas de desarrollo", véase: Paula Rojas y Emilce Mora Jaime, "Plan de Acción de Biodiversidad para la Implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 2016-2030", Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017, www.cbd.int/doc/world/co/co-nbsap-v3-en.pdf; González-González, Clerici y Quesada, "Growing Mining Contribution to Colombian Deforestation."

⁹¹Hasta principios de 2022, Glencore, Anglo American y BHP tenían participaciones iguales en la mina.

⁹²Se estima que el 95 por ciento de los bosques secos del país han sido reducidos de su cobertura original, incluyendo cerca del 70 por ciento de los bosques típicamente andinos, ver: CDB, "Colombia-Main Details"; Yamileth Domínguez-Haydar e Inge Armbrecht, "Response of Ants and their Seed Removal in Rehabilitation Areas and Forests at El Cerrejón Coal Mine in Colombia", *Restoration Ecology* 19, no: 178-184, <https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2010.00735.x>.

⁹³Jen Moore, "Colombian courts must not be undermined by shadowy international tribunals, say campaigners", Institute for Policy Studies, 13 de septiembre de 2022, <https://ips-dc.org/colombian-courts-must-not-be-undermined-by-shadowy-international-tribunals-say-campaigners/>; Astrid Ulloa, "The Rights of the Wayúu People and Water in the Context Of Mining in La Guajira, Colombia: Demands of Relational Water Justice", *Human Geography* 13, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1177/1942778620910894>.

⁹⁴González-González, Clerici y Quesada, "Growing Mining Contribution to Colombian Deforestation".

⁹⁵Lise Josefson Hermann, "In a Fight Over a Colombian Coal Mine, Covid-19 Raises the Stakes", *Grist*, 29 de julio de 2020, <https://grist.org/justice/in-a-fight-over-a-colombian-coal-mine-covid-19-raises-the-stakes/>.

⁹⁶Jen Moore, "Colombia: Corporate Claims vs. Human Rights", Institute for Policy Studies, 17 de julio de 2023, <https://ips-dc.org/colombia-corporate-claims-vs-human-rights/>; estos impactos medioambientales y sobre la salud perjudican de forma desproporcionada a las mujeres, que a menudo son las responsables de los sistemas hídricos y están conectadas a ellos, véase: Ulloa, "The Rights of the Wayúu People and Water"; Kuntala Lahiri-Dutt, "New Directions in Research on Women and Gender in Extractive Industries", *The Extractive Industries and Society* 9 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101048>.

relatores especiales de la ONU pidieron que se detuviera la explotación minera en El Cerrejón debido a la contaminación y los desplazamientos,⁹⁷ pero la extracción continúa en este emplazamiento y en otras minas de carbón de Colombia.

Al exportar el 90% del carbón que extrae,⁹⁸ Colombia es el quinto exportador mundial de carbón y el tercero de coque, combustible derivado del carbón.⁹⁹ Mientras que las regiones donde se concentran las minas de carbón dependen en gran medida de los cánones de la minería del carbón,¹⁰⁰ la desigual distribución de cargas y beneficios da lugar a una serie de injusticias para las comunidades locales.¹⁰¹ Por ejemplo, más de 336 mil casos de enfermedades respiratorias en el norte de Colombia son directamente atribuibles a las actividades mineras.¹⁰² Y aunque la mina de El Cerrejón aporta el 44% del PIB de la región, ésta sigue siendo una de las jurisdicciones más pobres de Colombia.¹⁰³ Más de la mitad de la población de la región vive por debajo del umbral de pobreza y al menos una cuarta parte de la población vive en la pobreza extrema.¹⁰⁴ Estos son síntomas de una cadena de suministro global asimétrica que impone costes medioambientales y sociales a poblaciones ya marginadas en Colombia para obtener beneficios en otros lugares¹⁰⁵-un ejemplo paradigmático de extractivismo.

Este paradigma de exportación de carbón es injusto e insostenible.¹⁰⁶ Entonces, ¿por qué continúa? ¿Qué mantiene proyectos de carbón como El Cerrejón, que contravienen las prioridades medioambientales nacionales declaradas, así como la salud y la seguridad locales? El sector minero de Colombia es parte de la historia de conflicto violento y el acaparamiento interno de recursos del país. Pero también está fuertemente sostenido por las instituciones financieras internacionales y los sistemas jurídicos, a pesar de los compromisos del gobierno para reducir la industria y transitar hacia la reducción de los combustibles fósiles. Este estudio de caso aborda el modo en que las estructuras financieras y jurídicas internacionales obstaculizan la transición justa y la conservación de la biodiversidad en Colombia.

⁹⁷"UN expert calls for halt to mining at controversial Colombia site", Naciones Unidas, modificado por última vez el 26 de septiembre de 2020, www.ohchr.org/en/press-releases/2020/09/un-expert-calls-halt-mining-controversial-colombia-site?LangID=E&NewsID=26306.

⁹⁸Rubiano A., "How Colombia Plans to Keep its Oil and Coal in the Ground".

⁹⁹"Coal", Agencia Nacional de Minería, consultado el 7 de noviembre de 2023, <https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/2022-02/Fact%20Sheet%20Coal%2001%202022.pdf>.

¹⁰⁰Las minas de carbón se concentran en los departamentos administrativos de Cesar y La Guajira (donde se encuentra El Cerrejón), que también son zonas con una importante población indígena y afrodescendiente; Gabriel Weber et al., "Exploring Resilience in Public Services within Marginalised Communities During Covid-19. The Case of Coal Mining Regions in Colombia: The Case of Coal Mining Regions in Colombia", *Journal of Cleaner Production* 415 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137880>.

¹⁰¹Noel Healy, Jennie C. Stephens y Stephanie A. Malin, "Embodied energy injustices: Unveiling and politicizing the transboundary harms of fossil fuel extractivism and fossil fuel supply chains", *Energy Research & Social Science* 48 (2019): 219-234, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.09.016>.

¹⁰²Kees Kodde y Bram Joanknecht, "A Toxic Legacy: Glencore's Footprint in Colombia and Peru: European banks and investors must take responsibility", Fair Finance International, Finanzas con Derechos Perú y Finanzas Justas Colombia, Oxfam Internacional, 2023, <https://policy-practice.oxfam.org/resources/a-toxic-legacy-glencores-footprint-in-colombia-and-peru-european-banks-and-inve-621550/>.

¹⁰³Line Jespersgaard Jakobsen, "Extractive Subjectivity in a Corporate Coal Mining Site in Colombia", *Geoforum* (2022), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718522001427#s0015>; el carbón no beneficia uniformemente a las comunidades locales, pero mantiene los medios de subsistencia de los empleados mineros. El cierre de dos minas en 2020 debido a la caída de los precios de las materias primas sumió a las comunidades cercanas en una recesión económica, lo que revela la persistente importancia de las exportaciones de carbón en los medios de subsistencia de muchas personas, aun cuando los ingresos procedentes del carbón no abordan de manera sustantiva la pobreza e incluso contribuyen a la desigualdad, véase: Rubiano A., "How Colombia Plans to Keep its Oil and Coal in the Ground".

¹⁰⁴Jacqueline Elyse Gilbert, Tamra Gilbertson y Line J. Jakobsen, "Incommensurability and Corporate Social Technologies: A Critique of Corporate Compensations in Colombia's Coal Mining Region of La Guajira", *Journal of Political Ecology* 28, nº 1 (2021), [www.doi.org/10.2458/jpe.2952](https://doi.org/10.2458/jpe.2952).

¹⁰⁵Federico Suárez Ricaurte, "Two Tiers And Double Standards: Foreign Investors and the Local Community of La Guajira, Colombia", *Globalizations* 19, no. 6 (2022): 854-864, doi.org/10.1080/14747731.2022.205451/1; Aviva Chomsky, Steve Striffler y Garry Leech, eds., *The People Behind Colombian Coal: Mining, Multinationals and Human Rights* (Bogotá: Casa Editorial Pisando Callos, 2007).

¹⁰⁶Ciara Nugent, "No Oil Producer Wants to Be the First to Give Up the Fuel. Except Gustavo Petro's Colombia", *Time*, 22 de junio de 2022,

El papel del carbón en la economía colombiana

Históricamente, el gobierno colombiano ha presentado las industrias extractivas, incluido el carbón, como la manera de obtener ingresos públicos para poner fin al conflicto armado que ha asolado el país, lo que refleja un discurso predominante que equipara la paz (o la pacificación) con el desarrollo.¹⁰⁷ El Plan Colombia de 2000, un programa estadounidense de lucha contra los carteles de la droga y los grupos insurgentes de izquierdas, exemplificó este enfoque. El plan proporcionaba ayuda militar estadounidense a los escuadrones de la muerte paramilitares, que llevaban a cabo asesinatos políticos contra las fuerzas de izquierda,¹⁰⁸ y también afirmaba que el crecimiento a través de la liberalización económica era el camino para alcanzar la paz tras el conflicto armado.¹⁰⁹

El Plan Colombia coincidió con un giro político neoliberal más amplio ante la crisis de la deuda externa de Colombia a finales de los años noventa. Esta crisis dio lugar a una serie de políticas jurídicas y económicas orientadas a liberar y especializar los mercados, en línea con el Consenso de Washington.¹¹⁰ Este marco situó la inversión extranjera como motor esencial del desarrollo y la estabilidad financiera.¹¹¹ En consecuencia, muchos servicios públicos, organizaciones de telecomunicaciones, bancos, puertos, aeropuertos, servicios sanitarios, organismos de seguridad social y otras entidades fueron vendidos a empresas multinacionales, al igual que la industria del carbón.¹¹² El Código Minero de 2001, redactado con el asesoramiento de un bufete de abogados que representaba a las empresas mineras y bajo la influencia del Banco Mundial y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), acabó con las empresas mineras estatales, limitó la regulación gubernamental y creó condiciones preferenciales para atraer la inversión extranjera.¹¹³ En consecuencia, la inversión extranjera directa (IED) en minería aumentó un 700%, pasando de 2 mil a 3 mil millones de dólares anuales en la década de 1990 a 10 mil millones en 2005, y a más de 16 mil millones de dólares en 2012.¹¹⁴

Estas políticas facilitaron el auge de la minería en el país.¹¹⁵ Durante la primera década del siglo XXI, la producción de carbón aumentó un 80 por ciento,¹¹⁶ mientras se aprobaron cientos de títulos mineros, incluso en parques nacionales y territorios en manos de comunidades indígenas y afrocolombianas.¹¹⁷ Según el

www.time.com/6189763/colombia-oil-gustavo-petro/.

¹⁰⁷ John-Andrew McNeish, "Extracting Justice? Colombia's Commitment to Mining and Energy as a Foundation for Peace", *The International Journal of Human Rights* 4 (2017), doi.org/10.1080/13642987.2016.1179031; "Secretary-General's remarks at United Nations Private Sector Forum [as delivered]", Naciones Unidas, modificado por última vez el 24 de septiembre de 2018, www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-24/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum; María Carolina Olarte-Olarte, "De la paz territorial a la pacificación territorial: Poderes policiales antidisturbios y disidencia socioambiental en la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia", *Revista de Estudios Sociales*, n.º 67 (2019): 26-39, doi.org/10.7440/res67.2019.03.

¹⁰⁸ Oliver Villar y Drew Cottle, "FARC in Colombia: Twenty-First-Century US Imperialism and Class Warfare", *The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism* (2020): 1-21, doi.org/10.1007/978-3-319-91206-6_207-1.

¹⁰⁹ Daniel James Hawkins, "Reconfiguración del Estado colombiano: El difícil equilibrio entre consenso y coerción". *Iconos: revista de ciencias sociales*, no. 35 (2009): 105-116, <http://hdl.handle.net/10469/944>.

¹¹⁰ Nancy Birdsall, Augusto de la Torre y Felipe Valencia Caicedo, "El Consenso de Washington: Assessing a Damaged Brand", Center for Global Development, 2010, www.files.ethz.ch/isn/118196/wp213.pdf.

¹¹¹ Ricaurte, "Two Tiers And Double Standards".

¹¹² Leila M. Harris y María Cecilia Roa-García, "Recent Waves of Water Governance: Constitutional Reform and Resistance to Neoliberalization In Latin America (1990-2012)", *Geoforum* 50 (2013): 20-30, doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.07.009; William Avilés, "The Wayúu Tragedy: Death, Water and the Imperatives of Global Capitalism", *Third World Quarterly* 40, no. 9 (2019): 1750-1766, doi.org/10.1080/01436597.2019.1613638.

¹¹³ Avilés, "The Wayúu Tragedy".

¹¹⁴ Andrea Cardoso, "Behind the Life Cycle of Coal: Socio-Environmental Liabilities of Coal Mining in Cesar, Colombia", *Ecological Economics* 120 (2015): 71-82, doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.10.004.

¹¹⁵ Laura Gutiérrez-Gómez, "Mining in Colombia: Tracing the Harm of Neoliberal Policies and Practices", en *Environmental Crime in Latin America: The Theft of Nature and the Poisoning of the Land*, eds. David Rodríguez Goyes et al. (Londres: Palgrave Macmillan London, 2017): 85-113, doi.org/10.1057/978-1-337-55705-6.

¹¹⁶ Además, el 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos entre 2001 y 2011 se cometieron en regiones mineras y productoras de energía", ver: Avilés, "The Wayúu Tragedy".

¹¹⁷ Gutiérrez-Gómez, "Mining in Colombia".

¹¹⁸ Rojas y Jaime, "Plan de acción para la biodiversidad", 48-49.

¹¹⁹ Claudia Strambo y Angélica Johanna Puertas Velasco, "The Changing Politics of Coal Extraction in Colombia", Stockholm Environment Institute, 2017, jstor.com/stable/resrep02786.

Plan Nacional de Acción y Estrategias para la Biodiversidad de Colombia, entre 2004 y 2007 se produjo un aumento del 87% en los títulos para la minería del carbón;¹¹⁸ posteriormente, la producción de carbón se duplicó con creces, pasando de 38 millones de toneladas (Mt) en 2000 a casi 89 Mt en 2015.¹¹⁹ Las narrativas que equiparan la minería con la paz también persistieron durante este tiempo. En 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón proclamó: "Colombia necesita, reitero, y quiero repetírselo a ustedes, un sector minero fuerte, organizado, competitivo, sobre todo ahora que estamos avanzando decididamente en este camino hacia la paz y hacia la reconciliación".¹²⁰

Sin embargo, las deudas que justificaron la liberalización económica siguen influyendo en la política económica y medioambiental de Colombia. El carbón sustenta la economía colombiana,¹²¹ con ingresos que se utilizan para financiar importantes servicios.¹²² Pero esta dependencia del carbón también ha encerrado al país en un modelo económico extractivo que depende de las exportaciones de materias primas especializadas y a corto plazo para pagar las deudas y mantener la estabilidad financiera.¹²³ Estas deudas se derivan en parte del endeudamiento del gobierno para pagar la atención sanitaria, las vacunas y los servicios sociales durante la crisis de COVID-19, así como los planes de acción climática de la nación para reducir las emisiones y promover la circularidad económica.¹²⁴ Según el Banco Mundial, Colombia pagó 8.800 millones de dólares para el servicio de la deuda pública y con garantía pública y para los recargos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022,¹²⁵ y los pagos de intereses por sí solos crecieron hasta el 15 por ciento de los ingresos netos del gobierno en 2022, desde un promedio del 8 por ciento entre 2010 y 2021.¹²⁶

Durante la primera década del siglo XXI, la producción de carbón aumentó un 80 por ciento, 116 mientras se aprobaron cientos de títulos mineros, incluso en parques nacionales y territorios en manos de comunidades indígenas y afrocolombianas.

El pago de estas deudas externas requiere que Colombia genere divisas, sobre todo mediante las exportaciones. Entre 2018 y 2022, el carbón representó en promedio el 18 por ciento de los ingresos por exportaciones del país y todos los combustibles fósiles el 50 por ciento (ver Cuadro 1). Estos ingresos son

¹²⁰Citado en Claudia Strambo y Ana Carolina González Espinosa, "Extraction and Development: Fossil Fuel Production Narratives and Counter-narratives", *Climate Policy* 20, no. 8 (2020), doi.org/10.1080/14693062.2020.1719810.

¹²¹Claudia Strambo et al., "Privileged Coal: The Politics of Subsidies for Coal Production in Colombia", Stockholm Environment Institute, 2018, thecoalhub.com/wp-content/uploads/2018/06/sei-2018-pubs-coal-subsidies-political-0129.pdf.

¹²²Angela Picciariello, Adriana Quevedo e Ipek Gençsü, "Phasing Out Fossil Fuel Subsidies in Colombia: A Crucial Step Towards a Just Energy Transition", ODI Working Paper, 2022, cdn-odi-production.s3.amazonaws.com/media/documents/ODI_Working_paper_Phasing_out_fossil_fuel_subsidies_in_Colombia_9rTjlFQ.pdf; Strambo et al., "Privileged Coal".

¹²³Tobias Franz, "Spatial Fixes and Switching Crises in the Times of Covid-19. Implications for Commodity-Producing Economies in Latin America": Implications for Commodity-Producing Economies in Latin America", *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement* 42, n° 1-2 (2021): 109-121, <https://doi.org/10.1080/02255189.2020.1832881>.

¹²⁴"Colombia Calls for Global Financial Consensus to Avert COVID Debt Crisis", Noticias ONU, modificado por última vez el 21 de septiembre de 2021, <https://news.un.org/en/story/2021/09/1100512>.

¹²⁵"World Development Indicators", Banco Mundial, consultado el 5 de febrero de 2024. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>; esta cifra incluye el servicio de la deuda externa, pública y con garantía pública, y las recompras y cargos del FMI.

¹²⁶"A World of Debt", UNCTAD, 2023, <https://unctad.org/publication/world-of-debt>; Para acceder a estos datos, hay que navegar hasta la pestaña "Debt Dashboard" y seleccionar Colombia como base de comparación, luego hacer clic en "Public debt interest payments as a share of revenues" en la pantalla en forma de rueda y, por último, seleccionar "Trend over time" en el gráfico de la derecha de la pantalla.

¹²⁷Silvio López y Fernando Patzy, "Carbón Térmico en Colombia: Implicaciones para la Economía de la Guajira y Cesar", Natural Resource Governance Institute, 2021, resourcegovernance.org/es/publications/carbon-termico-en-colombia-implicaciones-para-la-economia-de-la-guajira-y-cesar.

fundamentales para el comercio internacional, la balanza de pagos, la adquisición de divisas y los pagos por regalías de Colombia.¹²⁷ Las divisas obtenidas a través de estas exportaciones también permiten a Colombia estabilizar su moneda; esto es especialmente relevante dado que se dice que las intenciones declaradas del gobierno de detener la producción de combustibles fósiles han contribuido a una caída del 20 por ciento del peso colombiano frente al dólar estadounidense.¹²⁸ Estas depreciaciones del peso frente al dólar también encarecen las deudas externas denominadas en divisas como el dólar, creando un ciclo de dependencia que va más allá de la pérdida de ingresos inmediatos. Esta dependencia de la extracción para la exportación limita claramente la capacidad del gobierno colombiano para actuar en materia de biodiversidad y mitigación del cambio climático.

Las políticas comerciales internacionales succionan al carbón fuera de Colombia

El derecho internacional de inversiones también defiende la extracción. Los países establecen acuerdos internacionales de inversión, generalmente para promover la liberalización del comercio. A través de un mecanismo del derecho internacional de inversiones denominado Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), los inversores pueden demandar legalmente a los Estados si perciben un incumplimiento de contrato; por ejemplo, la cancelación de un proyecto existente debido a su impacto medioambiental.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Colombia ha suscrito 21 acuerdos internacionales de inversión, ocho de los cuales entraron en vigor en 2023, incluido uno con Suiza, que acoge a la multinacional de recursos Glencore (propietaria de El Cerrejón).¹²⁹ Estos acuerdos son arbitrados por un panel de jueces internacionales. En los últimos años, Colombia se ha enfrentado a un volumen de demandas de arbitraje que se encuentra entre los más altos de América Latina, con la mayor parte de los casos de arbitraje relacionados con las industrias extractivas.¹³⁰ En marzo de 2023, las reclamaciones pendientes ascendían a 13.200 millones de dólares, lo que equivale al 13% del presupuesto nacional de 2023.¹³¹

Por el contrario, los Estados -y, lo que es más importante, las comunidades afectadas- no pueden demandar a los inversores, lo que les deja sin vías legales claras para reclamar la restitución de los daños financieros o ecológicos causados por las empresas mineras. Esta estructura da ventaja a las empresas mineras y privilegia los intereses económicos de los inversores/empresas multinacionales para mantener la extracción.¹³²

¹²⁸Peter Millard y Patricia Laya, "As the World Backpedals on Ditching Fossil Fuels, One Oil Major Plows Ahead", *Bloomberg*, 26 de octubre de 2022, www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-26/colombia-s-petro-pursues-energy-transition-despite-economic-cost?embedded-checkout=true; Rodrigo Campos y Nelson Bocanegra, "Colombia Will Export Fossil Fuels for a Long Time, Finance Minister Says", *Reuters*, 20 de junio de 2023, www.reuters.com/world/americas/colombia-will-export-fossil-fuels-long-time-finance-minister-2023-06-20/.

¹²⁹"Colombia: International Investment Agreements Navigator", UNCTAD Investment Policy Hub, 2023, investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/45/colombia; también llamados Tratados Internacionales de Inversión (TII), "Estos tratados otorgan a los inversores extranjeros ciertas protecciones y beneficios, incluido el recurso a la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) para resolver controversias con los Estados receptores"; véase: "Primer on International Investment Treaties and Investor-State Dispute Settlement", Columbia Center on Sustainable Investment, 2022, <https://ccsi.columbia.edu/content/primer-international-investment-treaties-and-investor-state-dispute-settlement>; Ricaurte, "Two Tiers and Double Standards".

¹³⁰"Report of the International Mission to Colombia: Stop ISDS", Salvemos el Agua, Salvemos la Vida y La Guajira le Habla Al País Plataforma, 2023, <https://miningwatch.ca/publications/2023/8/24/stop-isds-report-international-mission-colombia>.

¹³¹"Final Report of International Mission to #StopISDS Recommends Colombia's Withdrawal from System of Corporate Abuse and Impunity by way of a Citizens Audit", Institute for Policy Studies, 15 de agosto de 2023, ips-dc.org/final-report-of-international-mission-to-stop-isds/.

¹³²También se ha argumentado que las ISDS promueven un "enfriamiento regulatorio", por el que los países envueltos en All pueden verse disuadidos de regular la actividad industrial por miedo a una demanda. Esto exacerba los giros neoliberales hacia la desregulación medioambiental que a menudo impulsaron a las naciones hacia los All en primer lugar; véase: Kyla Tienhaara, "Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement", *Transnational Environmental Law* 7, n.º 2 (2018): 229-50, doi.org/10.1017/S2047102517000309.

¹³³Ricaurte, "Two Tiers And Double Standards".

Por ejemplo, las ISDS han permitido a Glencore explotar minas y obtener beneficios a expensas de las comunidades locales y las ecologías de las que dependen.¹³³ En 2010, Glencore y Colombia firmaron un contrato de regalías mineras. Más tarde, el Estado intentó rescindir el contrato porque la mina estaba perdiendo dinero, contaminando el agua y despojando a la gente de sus tierras.¹³⁴ En 2017, los tribunales colombianos dictaminaron que la minería en la región de Arroyo Bruno (donde se encuentra El Cerrejón) constituía una violación inconstitucional de los derechos de la comunidad indígena wayúu, a la que la minería del carbón exponía a niveles tóxicos de contaminación del agua y el aire.¹³⁵ Sin embargo, Glencore interpuso y ganó tres ISDS contra el Estado por incumplimiento de contrato. En 2019, un panel del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ordenó a Colombia pagar a Glencore 19,1 millones de USD,¹³⁶ y en 2022, el panel ISDS dictaminó que Glencore podía continuar legalmente con las operaciones mineras.¹³⁷

Perspectivas

Está previsto que la mina de carbón de El Cerrejón cierre en 2034, aunque actualmente no existe ningún plan concreto de cierre.¹³⁸ Mientras tanto, miembros de la comunidad indígena wayúu, además de emprender acciones legales, están bloqueando El Cerrejón porque la mina ha contribuido a degradar la cantidad y calidad del agua en medio de una sequía mortal.¹³⁹ Otros colombianos han emprendido acciones legales internacionales presentando denuncias ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por la violencia en la cadena de suministro de carbón.¹⁴⁰ El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado que el plan del Estado para una transición acelerada de los combustibles fósiles hacia las energías renovables exigirá el cese de nuevos arrendamientos de petróleo y carbón, y la sustitución de las divisas derivadas de los combustibles fósiles por otros ingresos como base de la economía nacional.¹⁴¹ Pero para hacer realidad este plan serán necesarias reformas de las estructuras financieras y jurídicas internacionales, en el espíritu de la solidaridad internacional para una transición justa.

Conservar la rica biodiversidad de Colombia requiere no sólo reformar las causas inmediatas, como la minería, sino reparar las injusticias más profundas que sitúan a la minería y a los combustibles fósiles como necesarios para la estabilidad financiera.

¹³⁴"Colombian delegation attends Glencore AGM to present demands over Bruno Creek", London Mining Network, modificado por última vez el 4 de mayo de 2022, londonminingnetwork.org/2022/05/colombian-delegation-attends-glencore-agm-to-present-demands-over-bruno-creek/.

¹³⁵Jen Moore, "Colombia: corporate claims vs human rights", Latin American Bureau, 17 de julio de 2023, lab.org.uk/colombia-corporate-claims-vs-human-rights/.

¹³⁶Ricaurte, "Dos niveles y dobles raseros".

¹³⁷"Public Statement: Colombian Government Authorises Further Destruction of Arroyo Bruno in La Guajira", ABColombia, modificado por última vez el 4 de noviembre de 2022, www.abcolombia.org.uk/public-statement-colombian-government-authorises-further-destruction-of-arroyo-bruno-in-la-guajira/.

¹³⁸Véase también el incipiente debate sobre el "extractivismo verde" en la región: Astrid Ulloa, "Aesthetics of Green Dispossession", *Journal of Political Ecology* 30, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.2458/jpe.5475>.

¹³⁹Brent Patterson, "Glencore Calls on Colombian Police to Remove Indigenous and Afro-descendant Blockades at Cerrejón Coal Mine", PBI Canadá, última modificación el 3 de septiembre de 2022, <https://pbicanada.org/2022/09/03/glencore-calls-on-colombian-police-to-remove-indigenous-and-african-descendant-blockade-of-cerrejón-coal-mine/>; Carol Sánchez, "In Colombia, Threatened Women of the Wayuu Continue to Fight Rampant Mining", Mongabay, 13 de diciembre de 2021, <https://news.mongabay.com/2021/12/in-colombia-threatened-women-of-the-wayuu-community-continue-to-fight-rampant-mining/>; Oliver Pieper, "Germany's Dirty Colombian Coal", DW, 26 de mayo de 2022, www.dw.com/en/germany-s-dirty-colombian-coal/a-61935515; Avilés, "The Wayuu Tragedy".

¹⁴⁰Joseph Wilde-Ramsing, "'Blood Coal' Complaint Alleges Complicity of European Energy Companies in Abuses", SOMO, última modificación 20 de abril de 2023, <https://www.somo.nl/blood-coal-complaint-alleges-complicity-of-european-energy-companies-in-abuses/>.

¹⁴¹Julián Reingold, "What are the Challenges to a Just Energy Transition in Colombia?" *Energy Monitor*, 16 de febrero de 2023, www.energymonitor.ai/policy/what-are-the-challenges-to-a-just-energy-transition-in-colombia/.